



La Presidenta de  
la Comunidad Autónoma de Aragón

El último Debate del Estado de la Comunidad de esta Legislatura se va a producir en el momento en que ya es posible advertir con claridad el cambio de ciclo económico. Durante siete años, tres de ellos correspondientes a la presente legislatura, hemos estado inmersos en una crisis cuya profundidad y extensión no sólo han causado un daño económico evidente, especialmente en el empleo, sino que han producido cambios sociales y políticos significativos.

La crisis, que tiene causas acreditadas y conocidas, ha sido para algunos la ocasión de poner en cuestión precisamente aquello que más necesitábamos para superarla: el crédito de nuestras instituciones, el respeto a las normas y a los procedimientos, la voluntad de cooperación, la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad como sociedad para sobreponernos a los malos momentos.

No obstante, y pese a la caída de expectativas que ha padecido, la sociedad aragonesa ha permanecido claramente al lado de sus instituciones y ha confiado en ellas para liderar la recuperación, que finalmente se está produciendo.

Hoy, todos los centros de referencia, dentro y fuera de España, certifican que la economía vuelve a crecer, que el descenso del paro es ya una evidencia incontestable y que Aragón se encuentra bien situada para aprovechar el nuevo crecimiento y transformarlo en empleo, en oportunidades y en bienestar.

Es momento de hacer balance de los tres años de legislatura en los que ha sido necesario afrontar simultáneamente problemas complejos que incluso por

separado habrían constituido desafíos extraordinarios para cualquier Gobierno, pero que están siendo superados y ofrecen a los aragoneses horizontes esperanzadores.

Para comprender lo que se ha logrado hacer desde el año 2011, empezando por la regeneración de nuestra imagen exterior, clave de la confianza que Aragón suscita ahora en los mercados, avalada recientemente por las agencias de rating, es necesario tener en cuenta este punto de partida y el marco general en el que la acción del Gobierno de Aragón ha tenido que producirse.

Baste recordar como las cifras presupuestarias de los últimos años de la anterior legislatura estaban muy por encima de la capacidad financiera real de la Comunidad. El ejercicio correspondiente al año 2010 se cerró con un déficit de 977 millones de euros al que posteriormente hubo que añadir 220 millones de gasto sin contabilizar.

Sin embargo el año 2013 se ha cerrado con un déficit de 666 millones de euros, cifra en la que se encuentra incluido el Plan Impulso puesto en marcha por el Gobierno en el segundo semestre del año, y que tan buenos resultados dio en materia de empleo.

Todo ello a pesar de que la duración de la crisis ha afectado a la actividad y a los ingresos, y ha exigido aún más a los gastos sociales.

Ante esa realidad indiscutible, el Gobierno de Aragón se fijó prioridades que son conocidas. En primer lugar, ejemplificar el compromiso institucional con la responsabilidad, la transparencia y el buen uso de todos los recursos públicos.

En segundo lugar, proteger a los aragoneses frente a los peores efectos de la crisis, movilizandoo para ello todos los recursos públicos disponibles y blindando el peso presupuestario de las políticas sociales.

Tercero, abordar una profunda agenda reformista que regenerara el tejido productivo de nuestra economía y que impulsara un proceso de modernización integral de nuestra Comunidad.

Cuarto, hacer el trabajo de planificación y previsión necesario para que la recuperación y la inversión pudieran producir beneficios sociales a partir del instante mismo en que la crisis quedara atrás, comenzando por el empleo.

Y, finalmente, favorecer la cohesión entre territorios y entre generaciones para hacer realidad un Aragón de todos.

Todo esto al tiempo que se hacía realidad una mayor presencia positiva de Aragón en el conjunto de España, con voz propia y con peso suficiente para defender nuestros intereses.

Para cumplir con esos objetivos hemos puesto en marcha iniciativas que como los proyectos de ley de Transparencia Pública y Subvenciones permitirán al ciudadano conocer al detalle en qué invierte su dinero el Gobierno de Aragón; en materia de política social destinamos dos de cada tres euros de nuestro presupuesto anual a Educación, Sanidad y Servicios Sociales; hemos implementado una agenda reformista en la economía regional que nos permite destacar en creación de empleo y crecimiento de PIB; el Gobierno de Aragón ha disminuido la presión fiscal a los aragoneses mejorando entre otros los beneficios fiscales para los nuevos empresarios, los pensionistas o para el mundo rural.

Ante el inicio de la recuperación estamos presentando al resto de España los puntos fuertes que convierten a Aragón en un territorio atractivo para las inversiones, por la preparación de nuestros recursos humanos, la fiabilidad, el rigor y la competitividad de nuestro modelo.

El resultado de todas estas iniciativas es que Aragón ha mejorado su posición relativa, lo que significa que la gran mayoría de los indicadores nos sitúan mejor que la media, y con ello estamos logrando dar cumplimiento a nuestro

deseo de hacer de nuestra Comunidad un territorio cada día más importante en España y en el conjunto del sur de Europa.

El Gobierno de Aragón genera confianza porque es riguroso y estable, porque se esfuerza por cumplir sus compromisos, porque no se ha dejado alejar de su rumbo pese a que en ocasiones haya tenido que enfrentarse a un clima político hostil. Y eso es un activo social de la mayor importancia que se refleja en los costes de financiación, en el atractivo para inversores y empresarios y, sobre todo, en las oportunidades que se están generando para los aragoneses.

Una confianza que se apoya de manera destacada y fundamental en el Pacto de Gobernabilidad entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, que ha sido la base sobre la que se ha asentado la salida de la crisis en Aragón y la recuperación que estamos comenzando a experimentar.

El balance general de estos tres años de legislatura puede enfocarse desde muchos puntos de vista, pero el Gobierno ha expresado siempre su convicción de que la verdadera medida de su rendimiento debía darla la evolución del mercado de trabajo.

El dato del paro registrado en el pasado mes de junio, como continuación a cuatro meses anteriores de descenso, indica que los esfuerzos que toda la sociedad aragonesa ha realizado en los últimos años, encabezada y alentada por el Gobierno que presido, se han orientado en la buena dirección y comienzan a producir los resultados que siempre hemos deseado y que, contra el criterio de algunos, siempre hemos considerado posibles.

La Legislatura comenzó destruyendo empleo, pero en estos momentos se está creando empleo neto de manera sostenida. En este momento el número de parados se sitúa ya en nuestra Comunidad por debajo de los 100.000, y hemos logrado registros que no tienen comparación desde antes del inicio de la crisis.

Nuestros datos relativos son claramente mejores que los de las Comunidades que deben servirnos de referencia. No sólo en materia de empleo sino también

en otras variables económicas destacadas, como una evolución más positiva del Valor Añadido Bruto Industrial, la mayor creación de empresas mercantiles, el incremento de las exportaciones o una menor deuda pública medida en porcentaje de PIB.

Esta mejoría de nuestra posición nos permite encarar con confianza desafíos importantes, como la negociación de nuestra financiación, que exigimos atienda a las singularidades geográficas y demográficas de nuestro territorio. O la oposición a los procesos que pretenden desequilibrar nuestro modelo autonómico mediante una apelación inaceptable a la idea de la asimetría, que en realidad no es sino una manera de enmascarar la pretensión de la desigualdad.

Como señalé en esta misma comunicación el año pasado, la responsabilidad por la marcha de nuestra Comunidad no recae solo en el Gobierno y en los apoyos parlamentarios de que dispone, sino también en la contribución – positiva o negativa- de todos los actores políticos relevantes, cuya importancia en un sistema institucional como el nuestro es muy significativa, y cuya actitud puede acelerar o retrasar los beneficios sociales de la recuperación.

Creo que el Debate sobre el Estado de la Comunidad debe permitirnos conocer y debatir sobre todas estas cuestiones. Trasladar a los aragoneses un diagnóstico real de lo que somos ahora y de lo que podemos ser mañana y, de manera especial, plantearles un horizonte de futuro posible de prosperidad y bienestar.